JUICIO SUMARIO

1

Ciudad de México, a **veintiocho de febrero de dos mil veintitrés**.- V I S T O S para resolver los autos del juicio en que se actúa, **Jorge Luis Rivera Medel**, en su carácter de Titular de la Segunda Ponencia por Ministerio de Ley, en términos de lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en estricto cumplimiento al acuerdo G/JGA/7/2023, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y publicado en la página oficial de este Órgano Jurisdiccional www.tfjfa.gob.mx, ante el Secretario de Acuerdos, Eduardo Velasco Calderón, que actúa y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 49, en relación con el diverso 58-13, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, procede a dictar sentencia.

R E S U L T A N D O

1º. Mediante escrito ingresado en Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 11 de agosto de 2022 [redacted] en

representación legal de la sociedad [redacted] compareció a demandar la nulidad de la resolución determinante de los créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted] emitidas por el Titular de la Subdelegación 10 Churubusco Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2º. Por acuerdo de 15 de agosto de 2022, se admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose correr el traslado correspondiente a la autoridad demandada, para que produjera su contestación a la demanda.

3º. Mediante oficio ingresado en la Oficialía de Partes en línea de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, el 22 de septiembre de 2022, la autoridad demandada formuló su contestación a la demanda.

4º. A través de proveído de 28 de septiembre de 2022, se tuvo por contestada la demanda, requiriéndose diversas pruebas a la demandada.

5º. Mediante oficio ingresado en la Oficialía de Partes en línea de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, el 17 de octubre de 2022, la autoridad demandada cumplimentó el requerimiento de mérito.

6º. A través de proveído de 25 de noviembre de 2022, se tuvo por cumplimentado el mencionado requerimiento, asimismo se concedió a la actora término para formular su ampliación a la demanda.

7º. Mediante escrito ingresado en Oficialía de Partes Común el 2 de enero de 2023, la parte actora formuló su ampliación a la demanda.

8º. Por acuerdo de 4 de enero de 2023, se tuvo por formulada la ampliación a la demanda, ordenándose correr el traslado correspondiente a la autoridad demandada, para que produjera su contestación a la ampliación de la demanda.

9º. Mediante oficio ingresado en la Oficialía de Partes en Línea de este Tribunal, el 19 de enero de 2023, la autoridad demandada, formuló su contestación a la ampliación de la demanda.

10º. Por acuerdo de 10 de febrero de 2023, se tuvo por formulada la contestación a la ampliación de la demanda, en consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se concedió a las partes plazo común para que formularan sus alegatos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Magistrado que resuelve es competente para emitir la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 28, fracción I, 29, 30, 31, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con los artículos 58 y 58-2, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 48, fracción XVII y 49, fracción XVII, del Reglamento Interior de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020.

SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada ha quedado debidamente acreditada en autos, en términos de los artículos

129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora y por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.

TERCERO. En observancia a lo dispuesto en el artículo artículo 51, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como a las jurisprudencias 2a./J.218/2007 y 2a. /J.219/2007, que tienen por rubro: "*COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA*" y "*COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO*", fue examinada la competencia de la autoridad demandada, advirtiendo que el acto impugnado no adolece de incompetencia de la autoridad emisora o de ausencia total de fundamentación y motivación.

CUARTO. Toda vez que la parte actora controvirtió las constancias de notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo procede al

estudio y resolución de los argumentos formulados en contra dichos documentos, previo al estudio de los argumentos de fondo.

Alega la demandante que en las diligencias de notificación de los actos impugnados la autoridad fue omisa en circunstanciar la forma en que se cercioro de encontrarse en el domicilio correcto.

Manifiesta la actora que el notificador no circunstancio de qué manera se cercioro de la ausencia del representante legal, de como se constituyó en su domicilio, así como si dejo citatorio previo.

Manifiesta que no tiene vinculo laboral con la persona con quien se entendió la diligencia, incluso que no aparece en la cuentas individuales, que la autoridad hace uso de formatos pre impresos.

Una vez precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, los cuales preceptúan lo siguiente:

> **"Artículo 134.-** Las notificaciones de los actos administrativos se harán:
>
> **I.** Por buzón tributario, personalmente o por correo certificado, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.
> [...]"

> "**Artículo 137.** Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio fiscal, para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo, y en caso de que tampoco sea posible dejar el citatorio debido a que la persona que atiende se niega a recibirlo, o bien, nadie atendió la diligencia en el domicilio, la notificación se realizará conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción III de este Código.
>
> El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino.
>
> En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción III de este Código. En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 151 de este Código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán a través del buzón tributario.
>
> Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código."

De la lectura de los artículos en cita se tiene **las notificaciones de los actos administrativos se harán** por buzón tributario, **personalmente** o por correo certificado, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de **actos administrativos que puedan ser recurridos**, como los créditos fiscales impugnados en el presente juicio.

De igual manera se advierten las formalidades que deben seguirse en las notificaciones personales de los actos administrativos, siendo que una vez que el notificador se haya cerciorado de encontrarse en el domicilio correcto para llevar a cabo la diligencia,

deberá requerir la presencia de la persona con quien deba entenderse la notificación, en caso de que no se encuentre, le dejara citatorio en el en el domicilio fiscal, para que espere a una hora fija del día hábil siguiente.

Asimismo, si la persona citada o su representante legal no esperaren o no atienden el citatorio correspondiente, la diligencia se practicará con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino.

Sobre el tema relativo a la presencia del destinatario de la notificación, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 72/2007, emitió la jurisprudencia 2a./J.101/2007, consultable en página 288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007 del contenido siguiente:

> **NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO.** La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar razón circunstanciada, no sólo cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino se nieguen a recibir la notificación, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, sino al diligenciar

> cualquier notificación personal, en atención a sus características propias, su finalidad, su eficacia y los requisitos generales de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Ahora bien, conforme al criterio anterior y al texto del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al constituirse en el domicilio del interesado, el notificador debe requerir su presencia o la de su representante y, en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, ocasión esta última en la cual debe requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si éste o su representante no aguarda a la cita, previo cercioramiento y razón pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia debe practicarse con quien se encuentre en el domicilio o con un vecino, en su defecto. Lo anterior, porque el citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atienda al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la ausencia referida.

De dicha jurisprudencia se obtiene que si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atienda al llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el fedatario tiene la obligación de especificarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia debidamente circunstanciada de las razones por las que se cercioró de la ausencia del interesado o del representante legal, porque de otra manera no estaría satisfecho el presupuesto para que la diligencia se entendiera con un tercero.

En conclusión la autoridad demandada está obligada a circunstanciar las diligencias de notificación cuando las realiza en términos de los artículo 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, para no dejar en estado de indefensión al notificado, pues la razón circunstanciada debe levantarse para que sea concordante con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, pues el objeto de las formalidades específicas que disponen los numerales en cita, permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto cobra exacta aplicación la tesis 2a./J.15/2001, sostenida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, que establece:

> **"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).** Si bien es cierto que dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las características propias de las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada debe levantarse no sólo en el supuesto expresamente referido, sino también al diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el numeral en cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la

> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados."

Ahora bien, acorde con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, invocado por la sala, y con lo razonado por ésta, **se advierte que el citatorio y acta de notificación, por los cuales se notificaron los** créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted] **sí cumplieron con las formalidades que legalmente exige tal numeral para la práctica de las notificaciones personales.**

Se dice lo anterior, toda vez que del **citatorio previo** se advierte lo siguiente:

> • Que el **veintiocho de julio de dos mil veintidós**, Diana Pamela Reyes Santamaría, se constituyó en el domicilio ubicado en calle [redacted]
>
> • Que el notificador **se cercioró** de que era el domicilio de la empresa [redacted] por señalarse en los indicadores oficiales y por el dicho quien dijo llamarse Luna Cala Lara, en su calidad de empleada quien se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral.
>
> • Que al solicitar la presencia del patrón, dicha persona le informó que no se encontraba la persona que buscaba.
>
> • Que en virtud de lo anterior, por conducto de la persona que entendió la diligencia, **le dejó citatorio** para que esperara al notificador en el mismo domicilio, el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

· Que se le hacía saber, que en caso de no estar presente el representante legal del patrón en la hora y fecha indicadas, tal diligencia respectiva se practicaría **con quien se encontrara en el domicilio.**

Respecto de la diligencia de **notificación**, se aprecia lo siguiente:

· Que el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno Pamela Reyes Santamaría, se constituyó en el domicilio [redacted]

· Quien requirió la presencia del representante legal del patrón con el propósito de notificarle las cédulas de liquidación de los créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted] en su calidad de empleada quien se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, le informó que no se encontraba la persona que buscaba.

· Que al no encontrar al representante legal del contribuyente o persona autorizada procedió a notificar los oficios con [redacted] en su calidad de empleada del contribuyente antes citado.

De lo anterior se observa que en dichas diligencias el notificador **se constituyó en el domicilio** de la empresa [redacted] **cerciorándose de ser el domicilio del actor,** por así señalarse en los

indicadores viales y por el dicho de quien dijo llamarse [redacted] en su calidad de empleada del contribuyente antes citado, quien se identificó con credencial para votar, haciendo alusión a la resolución que se notifica, incluso en el acta de notificación se alude que se entregan las mismas firmadas.

Lo anterior, lleva a concluir que, los datos hechos constar por el notificador en las actas impugnadas conllevan a la certeza de que actuó en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.

De lo anterior, se tiene que contrario a lo argumentado por la actora, el notificador sí circunstanció debidamente la forma en que se cercioro de encontrarse en el domicilio correcto, así como la manera en que se cercioro de la ausencia del representante legal y que el representante legal no acudió a atender el citatorio, motivo por el cual entendió la notificación con un tercero, asimismo que sí hubo citatorios previos.

Por tanto, la parte actora no desestimó, con algún medio de prueba, la fe pública que revisten los actos del notificador, o bien que los hechos que hizo constar dicho servidor público fueran falsos o no correspondieran con la realidad, elementos que resultaban indispensables para que la demandante acreditara la pretensión de ilegalidad de las diligencias cuestionadas, puesto que, en su caso, debió demostrar que no es su domicilio fiscal, que la persona con la que se

entendieron las diligencias impugnadas en el juicio natural, no es su empleado, ni labora en el domicilio en el que se practicaron el citatorio y notificación que se cuestionan, o en su caso, que su estancia en ese domicilio era por circunstancias accidentales, y que por tanto, las diligencias no se habían llevado con la persona adecuada, lo que en la especie no aconteció.

Se invoca la jurisprudencia I.4o.A.J/84 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, consultable en la página 1812 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, en su Novena Época y cuyo rubro y texto son del tenor siguientes:

> **NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS.** En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del

> notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada.

Asimismo, contrario a lo señalado por la demandante en las diligencias de notificación se aprecia claramente el nombre de la persona con quien se entendieron, como se identificó, la hora en que se realizaron y su calidad de empleado de la empresa hoy actora.

Asimismo, si bien la actora aduce que la persona con quien entendió la diligencia no era su empleada, el notificador no tenía obligación de verificar el dicho del tercero, ni recabar los documentos con los que se acreditara el vínculo del tercero con el contribuyente, siendo suficiente a efecto de salvaguardar la legalidad del acto, que el notificador asiente los datos antes indicados.

Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J.85/2014 (10a.), correspondiente a la Décima Época, con número de registro digital 2007413, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, septiembre de 2014, Tomo I, página 746, que señala:

> **NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL CONTRIBUYENTE.** De la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación y en congruencia con el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en las jurisprudencias 2a./J. 15/2001 (*), 2a./J. 60/2007 (**), 2a./J.101/2007 (***) y 2a./J. 82/2009 (****), se advierte que para circunstanciar el acta de notificación es necesario que el notificador asiente datos objetivos que permitan concluir que: a) la diligencia

> se practicó en el domicilio señalado; b) se buscó al contribuyente o a su representante; y c) ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se encontraba en el domicilio. En este último caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni expresa la razón por la cual está en el lugar o la relación que tiene con el interesado, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble; si el tercero se encontraba en el interior, u otros datos diversos que, razonablemente, conlleven la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con quien dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva. De ahí que no puede obligarse al notificador a recabar los documentos con los que se acredite el vínculo del tercero con el contribuyente pues éste no está constreñido a justificar la razón por la que se encuentra en el lugar o su relación con el interesado ni, por ende, a proporcionar documentación referida con esa circunstancia, bastando entonces, a efecto de salvaguardar la legalidad del acto, que el notificador asiente los datos indicados, circunstanciando esos hechos en forma objetiva y no en meras apreciaciones subjetivas.

En relación a lo alegado por el demandante en el sentido que la persona que atendió la diligencia no aparece en las cuentas individuales, es de señalar que la notificación se efectuó en el mes de julio de 2022, mientras que el crédito corresponde al periodo [redacted] siendo claro que no comprende el mes de julio, en ese sentido resulta intrascendente que la persona que atendió la diligencia no se mencione en la cuentas individuales.

En relación al argumento en el que se señala que la notificación de la resolución impugnada es ilegal al haber sido levantada en **formatos preimpresos**, es de señalar que aun cuando el artículo 137, del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para la práctica de notificaciones personales y no prohíbe la utilización de formatos preimpresos, subsiste la obligación

del notificador de asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que justifiquen el porqué se realiza con persona distinta del interesado.

De ahí que no es factible alegar que sólo tiene validez una notificación donde se asienten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso donde conste que se requirió la presencia del interesado o de su representante y no se encontró, porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues si se emplean formatos o "machotes" en el levantamiento de la diligencia, y consta preimpreso que se requirió la presencia del interesado, esto no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto.

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.140/2005, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 176515, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 367, que señala:

> **NOTIFICACIONES PERSONALES DE CRÉDITOS FISCALES PRACTICADAS CON FORMATOS PREIMPRESOS. SON VÁLIDAS AUN CUANDO LO QUE SE HAGA CONSTAR EN ELLOS SEA LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE.** Aun cuando el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para la práctica de notificaciones personales y no prohíbe la utilización de formatos preimpresos, subsiste la

> obligación del notificador de asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que justifiquen el porqué se realiza con persona distinta del interesado; de ahí que no es factible alegar que sólo tiene validez una notificación donde se asienten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso donde conste que se requirió la presencia del interesado o de su representante y no se encontró, porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues si se emplean formatos o "machotes" en el levantamiento de la diligencia, y consta preimpreso que se requirió la presencia del interesado, esto no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto.

Por lo que resulta del todo infundado el hecho de que la utilización de formatos o "machotes" generan mayores violaciones a los derechos de los gobernados cuando en ellos se contemplan fases o etapas de las notificaciones personales que por su importancia e imprevisibilidad no debieron haber sido plasmados previo a la ejecución de la notificación.

Toda vez que la circunstanciación que hizo el notificador de constituirse en el domicilio fiscal, así como de la respuesta que dio el tercero con quien se entendió la diligencia, no son datos que hubiesen estado preimpresos, pues los mismos se asentaron de puño y letra del notificador; asimismo, el hecho de que en las diligencias de notificación en estudio se haya asentado que el notificador se constituyó en el domicilio del contribuyente, de su representante legal o de la persona a la que va dirigido el documento, no conlleva que la ilegalidad de las mismas, pues de su lectura se advierte que se apersonó en el domicilio del contribuyente [redacted] por lo que tal situación resulta intrascendente.

Por tanto, resulta legal la notificación del documento determinante de los créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted]

QUINTO. Con fundamento en el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en atención a los principios procesales de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, que rigen las sentencias, se procede únicamente al análisis de los agravios expuestos por la actora en su escrito inicial de demanda, toda vez que en el considerando anterior se resolvió que la notificación de los actos impugnados resultó apegada a derecho.

En ese sentido los agravios expuestos por la actora en su ampliación de la demanda, resultan inoperantes por extemporáneos, ya que previo a la interposición del presente juicio (10 de mayo de 2021) tenía conocimiento de los mismos al ser notificados legalmente el 27 de abril de 2021.

Se dice lo anterior, toda vez que por regla general conforme lo expuesto en el artículo 17, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la ampliación de la demanda procede contra todos aquellos actos que son desconocidos por el actor y que les son dados a conocer a través o con motivo de la contestación de la demanda; por lo cual, en una ampliación de demanda, sólo se pueden hacer valer como conceptos de anulación, los argumentos tendientes a controvertir cuestiones dadas a conocer por

esa contestación; por lo que, si la actora controvierte actos que ya conocía, es claro que dichos argumentos son inoperantes por extemporáneos.

Cobra aplicación la jurisprudencia VII-J-1aS-130, que señala:

> **AGRAVIOS INOPERANTES POR EXTEMPORÁNEOS.- SON AQUELLOS CONCEPTOS DE NULIDAD QUE A PESAR DE HABERSE PODIDO PLANTEAR EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, SE HACEN VALER EN EL DE AMPLIACIÓN.-** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, la ampliación de la demanda procede: a) Cuando se impugne una negativa ficta; b) Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se le den a conocer en la contestación; c) Cuando el actor manifiesta no conocer el acto impugnado y es dado a conocer mediante la contestación de demanda; y, d) Cuando en la contestación se introducen cuestiones no conocidas por el actor. En conclusión la ampliación de la demanda procede contra todos aquellos actos que son desconocidos por el actor y que les son dados a conocer a través o con motivo de la contestación de la demanda; por lo cual, en una ampliación de demanda, sólo se pueden hacer valer como conceptos de anulación, los argumentos tendientes a controvertir cuestiones dadas a conocer por esa contestación; por lo que, si la actora controvierte actos que ya conocía, como es la orden de visita de la que deriva la resolución impugnada y la falta de fundamentación de esta última, a través de una ampliación de demanda, los argumentos son **inoperantes** por extemporáneos.

Ahora, toda vez que se declararon legales las notificaciones de los créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted] concluyéndose que la hoy enjuiciante ya tenía conocimiento del acto impugnado previamente a la presentación de su escrito de demanda, debe regir el supuesto de la

fracción I, del artículo 16, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a que si la actora tiene conocimiento de la resolución debe expresar, en la demanda inicial, los conceptos de impugnación en su contra.

Por lo que, si la demandante formuló conceptos de impugnación en la demanda inicial en contra de los créditos fiscales impugnados, y siendo oportuna la presentación de la demanda, esta Sala debe examinarlos, aun cuando la actora haya manifestado, en el escrito inicial de demanda, desconocer los mismos.

Cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J.106/2013 (10a.), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2004255, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 2, página 930, que señala:

> **JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA SALA DEBE EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN FORMULADOS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA CONTRA LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, AUN CUANDO LA ACTORA MANIFIESTE DESCONOCERLA.** De los artículos 14 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo deriva que si bien la parte actora, en la ampliación de demanda, debe combatir la resolución impugnada y su notificación, en caso de que en el escrito inicial afirme desconocerla y la autoridad la exhiba en su contestación, lo cierto es que una vez calificada de legal la notificación practicada con anterioridad a la presentación de la demanda se destruye su afirmación, es decir, se pondrá en evidencia que ya tenía conocimiento del acto impugnado previamente a la presentación de su escrito inicial; como consecuencia de lo anterior, debe regir el supuesto de la fracción I del mencionado numeral 16, relativo a que si la actora tiene conocimiento de la resolución debe expresar, en la demanda inicial, los conceptos de impugnación en su contra;

> bajo ese contexto, si formuló tales conceptos y resulta oportuna la presentación de la demanda, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe examinarlos, aun cuando aquélla hubiera manifestado, en el escrito inicial de demanda, desconocer la resolución combatida.

Una vez precisado lo anterior, se tiene que la actora en su segundo agravio del escrito inicial de demanda alega que las resoluciones determinantes de los créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted] carecen de firma autógrafa.

La autoridad al formular su contestación a la demandada señala que los actos impugnados sí contienen firma autógrafa, señalando que lo anterior se acredita con las diligencias de notificación.

Al respecto es de señalar que en observancia a los principios de igualdad entre las partes y de equilibrio procesal, así como a la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento contenidos en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los juicios deben observarse las reglas legales previstas al respecto, entre las que se encuentra la relativa a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que las partes soporten sus posturas.

Por ello, en términos del artículo 40, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada puede ofrecer y desahogar cualquiera de los medios probatorios

permitidos por la ley, a fin de acreditar sus defensas, cuya idoneidad dependerá de los hechos que pretenda acreditar, y su apreciación y valoración del prudente arbitrio del Juez; en el entendido de que los hechos citados pueden constituir circunstancias variadas, distintas a las consideradas en las ejecutorias que dieron origen a las jurisprudencias 2a./J.195/2007 y 2a./J.13/2012 (10a.).

Así, ante la afirmación de la demandada de que las resoluciones combatidas contienen la firma autógrafa de la autoridad emitente que entregó al momento de su notificación al interesado, es posible que para demostrarlo y cumplir con la carga de la prueba, exhiba constancia del acta levantada al efecto, que pueda confirmar que aquel documento se recibió firmado en original, por ser un medio de prueba legal, sobre la base de que quien atendió la comunicación tuvo conciencia del contenido de la leyenda de mérito.

Lo anterior no impide que la parte actora pueda ofrecer prueba idónea para demostrar la falta de autenticidad de la firma correspondiente.

Cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J.110/2014 (10a.), correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2008224, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, página 873, que señala:

> **FIRMA AUTÓGRAFA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA DE CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA CONTIENE.** En observancia a los principios de igualdad entre las partes y de equilibrio procesal,

> así como a la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento contenidos en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los juicios deben observarse las reglas legales previstas al respecto, entre las que se encuentra la relativa a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que las partes soporten sus posturas. Por ello, en términos del artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada puede ofrecer y desahogar cualquiera de los medios probatorios permitidos por la ley, a fin de acreditar sus defensas, cuya idoneidad dependerá de los hechos que pretenda acreditar, y su apreciación y valoración del prudente arbitrio del Juez; en el entendido de que los hechos citados pueden constituir circunstancias variadas, distintas a las consideradas en las ejecutorias que dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 195/2007 (*) y 2a./J. 13/2012 (10a.) (**). Así, ante la afirmación de la demandada de que la resolución combatida contiene la firma autógrafa de la autoridad emitente que entregó al momento de su notificación al interesado, es posible que para demostrarlo y cumplir con la carga de la prueba, exhiba constancia del acta levantada al efecto, que pueda confirmar que aquel documento se recibió firmado en original, por ser un medio de prueba legal, sobre la base de que quien atendió la comunicación tuvo conciencia del contenido de la leyenda de mérito, máxime si ésta se ubica en el área donde firmó la recepción de aquel documento. Lo anterior no impide que la parte actora pueda ofrecer prueba idónea para demostrar la falta de autenticidad de la firma correspondiente.

Por tanto, al resultar legales las constancias de notificación de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted] es dable concluir que las mismas contienen firma autógrafa de la autoridad que las emite, por lo que el agravio en estudio resulta **infundado**.

SEXTO. Con fundamento en el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en atención a los principios procesales de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, que rigen las

sentencias, esta Sala procede al análisis de los conceptos de impugnación del escrito inicial de demanda, en los cuales niega tener algún vínculo laboral con las personas que se encuentran detalladas en la referida cédula de liquidación, así como haber realizado algún movimiento afiliatorio respecto de dichas personas.

Por su parte, al contestar la demanda, la autoridad sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada, manifestando medularmente que los estados de cuenta individuales de los trabajadores enlistados en la resolución combatida, son aptos y suficientes para acreditar la relación laboral entre éstos y la parte actora.

A juicio de este Órgano Colegiado, resultan **infundados** los conceptos de impugnación en estudio, de conformidad con las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

Los artículos 15, fracción III, 38 y 39 de la Ley del Seguro Social, establecen lo siguiente:

> **"Artículo 15.** Los patrones están obligados a:
> (...)
> **III.** Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto;
> ..."

> **"Artículo 38.** El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir.
> Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes a su cargo.

> El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que descuente a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al Instituto las cuotas Obrero patronales, en los términos establecidos por esta Ley y sus reglamentos."
>
> **"Artículo 39.** Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa informático, autorizado por el Instituto.
>
> Asimismo, el patrón deberá presentar ante el Instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate, y realizar el pago respectivo, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente.
>
> La obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse aun en el supuesto de que no se realice el pago correspondiente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.
>
> Los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivos al momento de notificarse y deben pagarse al Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley."

En la especie, la actora niega lisa y llanamente que tenga relación laboral alguna con los trabajadores señalados en las cédulas de liquidación determinante de los créditos fiscales [redacted] correspondientes al periodo [redacted], así como que haya proporcionado al Instituto demandado, los datos y movimientos de afiliación que sirvieron de sustento para la emisión de las mismas; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, corresponde a la autoridad demandada la carga de la prueba y en consecuencia, ésta debe desvirtuar la negativa de la demandante.

Es aplicable al caso la tesis III-TASS-1842, emitida por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, visible en la Revista del propio Tribunal, Tercera Época, Año III, número 32, agosto 1990, página 26, cuyo texto señala:

> "**NEGATIVA LISA Y LLANA. SU MANIFESTACIÓN TIENE COMO EFECTO REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA.** Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales tienen en su favor la presunción legal de ser válidos, también es verdad que en el propio numeral se establece que cuando el demandante niegue lisa y llanamente los hechos que motivaron dicho acto o resolución, éstos deben ser acreditados fehacientemente por la autoridad demandada, lo que es congruente además con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles."

En este sentido, para desvirtuar la negativa de la hoy actora, la autoridad demandada exhibió al formular su contestación de demanda, copia certificada de la consulta de cuentas individuales de los trabajadores que se enuncian en la cédula de liquidación impugnada, cuya certificación es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre la hoy actora y tales personas, ya que se encuentran certificadas conforme a lo establecido en los artículos 3°, 4° y 5° del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; los cuales establecen lo siguiente:

> "**Artículo 3.** El registro de los patrones y demás sujetos obligados, la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, la clasificación de empresas y la determinación de la prima de riesgo de trabajo, la determinación y pago de los créditos fiscales a cargo de patrones, trabajadores y demás sujetos obligados y de aseguramiento y en general cualquier otro sujeto de obligaciones establecidas en la Ley y en este

Reglamento, así como la comunicación de sus modificaciones salariales y bajas, el registro del contador público autorizado, el aviso para dictaminar, los modelos de opinión y la carta de presentación del dictamen y los demás de cualquier otra índole, se harán en los formatos impresos autorizados que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto. Salvo cuando la obligación se cumpla a través de un medio de los señalados en el artículo 5 de este Reglamento.

La reproducción y presentación de dichos formatos podrá realizarse en la forma y términos que señale el Instituto, o en cualquiera de los medios previstos en el último párrafo del artículo 15 de la Ley, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el mismo.

En el caso de que se omita presentar la información a que se refieren los párrafos anteriores, en los formatos o medios señalados, no se dará trámite a la solicitud, excepto cuando no se hayan publicado por el Instituto dichos formatos, en cuyo supuesto, se realizará mediante escrito reuniendo todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley y este Reglamento para el cumplimiento de las obligaciones.

Cuando el último día de los plazos señalados en este Reglamento para el cumplimiento de obligaciones, sea día inhábil o viernes se prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente. No se prorrogará el plazo para la presentación de avisos afiliatorios."

"Artículo 4. El Instituto podrá conservar en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, la información contenida en la documentación a que se refiere el artículo anterior, presentada en formatos impresos, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados; inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento.

El Instituto podrá expedir certificaciones de la información así conservada, en términos de las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 5. Los patrones y demás sujetos obligados que en los términos del artículo 15 de la Ley, realicen los trámites correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, deberán utilizar el número patronal de identificación electrónica, como llave pública de sistemas criptográficos a que se refiere el artículo 15

> de este Reglamento en sustitución de su firma autógrafa. Este número se tramitará de conformidad con los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
>
> Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto establecerá un sistema de identificación electrónica de tecnología criptográfica.
>
> La información a que se refiere el primer párrafo de este artículo en la que se utilice el número patronal de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, así como las certificaciones que de ésta expida el Instituto producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.
>
> El Instituto requerirá nuevamente el envío de la información remitida a que se refiere este artículo, en caso de que no se pueda tener acceso a la misma por problemas técnicos.
>
> Para los efectos del párrafo anterior, el patrón o sujeto obligado deberá enviar nuevamente la información en un plazo no mayor de cinco días hábiles contado a partir del requerimiento, a fin de que se le respete la fecha de presentación original. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentada."

Lo anterior, es acorde con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia que se cita a continuación, en la que se estableció el criterio de que *la exhibición de la certificación de los estados de cuenta individuales, es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón*, dado que de conformidad con los artículos 3º, 4º y 5º, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, tal información tiene valor probatorio pleno, misma que es obligatoria para esta Juzgadora y que se transcribe a continuación:

> **"ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA**

PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN. Los mencionados certificados, de conformidad con los artículos 3, 4 y 5, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, independientemente de ser resultado de información presentada vía formato impreso o de aquella presentada a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica, que hace las veces de sustituto de la firma autógrafa) tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (equivalente al artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación), en relación con el diverso 63 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando la parte patronal desconozca la relación laboral mediante su negativa lisa y llana. Por lo tanto, la certificación de los estados de cuenta individuales, es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón, de manera que, no es necesario exigir el perfeccionamiento de ese tipo de constancias con la exhibición, por ejemplo, de los avisos de afiliación presentados por el patrón."

De la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia transcrita, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si en un juicio contencioso administrativo el Instituto Mexicano del Seguro Social, para desvirtuar la negativa lisa y llana de la parte actora de la relación laboral, exhibe la certificación de los estados de cuenta individual, emitidos con las facultades legales que le otorgan los artículos 3º, 4º y 5º del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, con ello queda demostrada la relación laboral *sin que sea necesario que la autoridad demandada exhiba otros documentos, como pudieran ser los avisos de afiliación presentados por el patrón o los acuses de recibo correspondientes.*

En ese orden de ideas, se estableció en la ejecutoria referida que la negativa del patrón implica la afirmación de otro hecho, consistente en que no son esos trabajadores los afiliados o que los datos registrados son equivocados, por tanto, *corresponde al patrón desvirtuar tales certificaciones mediante la presentación de las pruebas pertinentes.*

También se desprende, de la ejecutoria de la referida jurisprudencia, que con la certificación de los estados de cuenta individual queda demostrada la voluntad de la empresa patronal de dar de alta a los trabajadores de que se trata, salvo prueba en contrario; esto es, que la parte patronal demuestre que los trabajadores que aparecen en las certificaciones referidas no pertenecen a aquellos por los que solicitó la afiliación correspondiente.

Bajo este contexto, se puede concluir que la certificación de los estados de cuenta individuales obtenida de los registros con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituyen prueba plena, apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y la hoy actora; y por ende, que ésta haya proporcionado a dicho Instituto, los avisos de afiliación respecto a tales personas.

En este tenor, resulta pertinente tener en cuenta el contenido de los artículos 6º y 50 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, establecen que:

> **"Artículo 6.** En todos los casos el Instituto o las oficinas autorizadas por el mismo, entregarán al patrón o sujeto obligado la constancia correspondiente del trámite realizado, ya sea en

forma impresa o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica a que se refiere la Ley, en este último caso, dicha constancia tendrá para todos los efectos legales, igual valor probatorio que la impresa.

Tratándose de la constancia que se entregue a través de los medios de comunicación electrónica, ésta deberá reunir los requisitos que establezcan los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

El patrón, en un plazo de tres días hábiles contados partir de la entrega de la mencionada constancia, por el mismo medio en que le fue entregada, confirmará que la información que proporcionó al Instituto concuerda con la registrada por éste, o bien, realizará las aclaraciones que procedan. En caso contrario, se tendrá por consentida.

De proceder la aclaración, se tendrá por realizado el trámite en la fecha en que fue efectuado originalmente."

"Artículo 50. El Instituto recibirá los avisos de inscripción de los trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, comprobando, en su caso, la veracidad de los datos, por los medios que estime pertinentes y de proceder, rectificará la información.

El patrón que solicite por escrito al Instituto la rectificación de datos proporcionados respecto de la fecha de ingreso al trabajo o del salario del trabajador, deberá comprobar fehacientemente la procedencia de su petición con la información y documentación que se le solicite.

La rectificación que proceda se sujetará a las reglas siguientes:

I. Si se refiere a la fecha de alta, reingreso o modificación de salario del trabajador, el Instituto procederá a realizar la rectificación respectiva previo pago, en su caso, por parte del patrón, de las prestaciones que se hubieran otorgado indebidamente al asegurado;

II. Si se trata de un salario inferior a uno superior, la rectificación surtirá efectos a partir de la fecha manifestada en el primer aviso, debiéndose cubrir las cuotas o, en su caso, los capitales constitutivos que procedan, y

III. Si se trata de un salario superior a uno inferior, la rectificación surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud.

No obstante lo anterior, el Instituto podrá efectuar la rectificación con la fecha manifestada en la solicitud, siempre y cuando se presente antes de realizar el pago que corresponda al mes en que se pretende surta efectos la modificación de salario y dentro de los diecisiete primeros días del mes siguiente. En este caso, el patrón deberá resarcir al Instituto las prestaciones que este último hubiere otorgado indebidamente al trabajador.

Si a través del dictamen de contador público autorizado se determina alguno de los supuestos a que se refiere este artículo, se aplicará la regla que proceda, teniéndose como fecha de la solicitud de rectificación la de presentación ante el Instituto de dicho dictamen."

De los numerales reproducidos se desprenden las siguientes premisas:

- El Instituto o las oficinas autorizadas por él entregarán al patrón o sujeto obligado la constancia correspondiente del trámite realizado, ya sea en forma impresa o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica previstos en la Ley del Seguro Social.

- La citada constancia tendrá, para todos los efectos legales, igual valor probatorio que la impresa.

- La constancia entregada a través de los medios de comunicación electrónica, deberá reunir los requisitos que establezcan los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto.

- El patrón, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la entrega de la mencionada constancia, por el mismo medio en que le fue entregada, confirmará que la

información que proporcionó al Instituto concuerda con la registrada por éste, o bien, realizará las aclaraciones que procedan. En caso contrario, se tendrá por consentida.

- El Instituto Mexicano del Seguro Social está facultado para comprobar la veracidad de los datos que proporcione el patrón, incluso, dicho Instituto puede proceder a la rectificación de datos. Además, el patrón que solicite la rectificación o aclaración de información deberá comprobar, fehacientemente, la procedencia de su petición.

Cabe destacar que los trámites previstos en el artículo 6° previamente transcrito son —entre otros— los relativos a la inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, así como el citado artículo 3º del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, de cuyo contenido se obtiene que la información proporcionada al Instituto, habrá de otorgarse en los formatos impresos autorizados y publicados en el Diario Oficial de la Federación, o bien, a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, para lo cual deberá emplearse el número patronal de identificación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, tal como lo prevé el transcrito artículo 5º del Reglamento en cita.

Sobre el particular, conviene traer a colación que el número patronal de identificación electrónica constituye la clave de acceso y autenticación requerida por los sistemas electrónicos del Instituto a los patrones o sujetos obligados, asociada a un registro patronal y certificado digital, el cual es entregado de forma confidencial por el Instituto, en conjunto con el documento de identificación patronal respectivo, en los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

El uso y guarda del número patronal de identificación electrónica, es responsabilidad del patrón, sujeto obligado o representante legal, quien estará en posibilidad de dar aviso al Instituto de cualquier situación que pudiera implicar la reproducción o uso indebido de ese número patronal de identificación electrónica, tal como lo dispone el artículo 15 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, así como el Aviso mediante el cual se dan a conocer los formatos Carta de Términos y Condiciones para la Obtención y Uso del Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital y Carta de Cancelación Presencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, cuyos contenidos son, en su orden:

> **Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.**
>
> **"Artículo 15.** El patrón o sujeto obligado deberá avisar al Instituto por escrito del robo, destrucción o extravío del

documento de identificación, para proceder a su reposición, previo pago correspondiente.

Asimismo, deberá dar aviso oportunamente al Instituto, para efectos de su invalidación y reposición, de la pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar la reproducción o uso indebido de su número patronal de identificación electrónica.
La presentación del aviso no exime al patrón o sujeto obligado de cumplir con sus obligaciones legales. Todos los actos realizados bajo el amparo de dicho documento o número patronal de identificación electrónica, serán válidos hasta la fecha de presentación del aviso respectivo.

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS CARTA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DEL NÚMERO PATRONAL DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y CERTIFICADO DIGITAL Y CARTA DE CANCELACIÓN PRESENCIAL.
...

En cumplimiento con el Acuerdo 43/2004 del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha 21 de enero de 2004, se dan a conocer los formatos denominados Carta de Términos y Condiciones para la Obtención y Uso del Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital y Carta de Cancelación Presencial, así como sus respectivos instructivos de llenado.
...
TÉRMINOS Y CONDICIONES.
...
2. El patrón, sujeto obligado o representante legal obligado es responsable del uso adecuado y la guarda del Número Patronal de Identificación Electrónica, y Certificado Digital, en caso contrario se hará merecedor a las sanciones contenidas en las Leyes respectivas y aplicables, estando considerada la revocación administrativa del Certificado Digital, por parte de Instituto Mexicano de Seguro Social..."

De lo anterior se colige que la información proporcionada al Instituto, a través de formato impreso o de aquellos medios electrónicos que impliquen el uso del número patronal de identificación electrónica, en principio, por la forma en que se

realizan los registros y cualquiera de las modificaciones de dichos actos, se puede colegir racional y objetivamente que dichos movimientos los efectuó el patrón y, por ende, son atribuibles a éste, pues debe tomarse en consideración que si el patrón opta por proporcionar al Instituto la información respectiva a través de los formatos impresos autorizados, deberá mostrar el documento de identificación patronal que le haya proporcionado el Instituto, el cual deberá contener el número de registro patronal asignado por el Instituto; nombre, denominación o razón social completos del patrón o sujeto obligado; actividad, clase y fracción; domicilio; firma del patrón o representante legal, y nombre y firma de las personas autorizadas por el patrón para presentar avisos de afiliación, tal como lo dispone el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Mientras que, si el patrón decide proporcionar la información relativa a los movimientos afiliatorios de trabajadores a través de medios electrónicos, no debe ignorarse que el uso y guarda del número patronal de identificación electrónica —otorgado confidencialmente— es responsabilidad del patrón, quien —en su caso— deberá informar al Instituto sobre cualquier situación que pudiera implicar la reproducción o uso indebido de su número patronal de identificación electrónica.

En ese orden de ideas, se deduce que pese al hecho de que la parte actora (patrón), además de desconocer la relación laboral

con las personas mencionadas en la cédula de liquidación impugnada, también niegue haber enviado o proporcionado la información contenida en los estados de cuenta respectivos; *esa sola afirmación no puede tener el alcance de desvirtuar la prueba consistente en las certificaciones de los estados de cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social exhibe para demostrar la relación laboral*, entre el patrón y los trabajadores asentados en dichas cédulas, pues se trata de una prueba idónea y suficiente, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para acreditar el vínculo laboral.

De tal suerte que, la negativa del envío de datos o desconocimiento de éstos por parte de la actora trae como consecuencia que se pueda demostrar que son otros los datos que se enviaron, porque esa negativa implica la afirmación de otro hecho, consistente, precisamente en que no envió datos, pero si con base en ello pretende negar la relación laboral y ésta quedó desvirtuada, entonces, corresponde a ella demostrar los extremos de su acción, sin poder revertir la carga probatoria al instituto respecto a que la información existente no la proporcionó el patrón.

Dicho de otro modo, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenía la carga procesal de demostrar que entregó la constancia del trámite realizado, a que alude el artículo 6º del Reglamento de la materia, ni probar que la parte actora realizó movimientos afiliatorios en relación con los trabajadores que se citan en las antedichas cédulas de liquidación, en todo caso, si la parte

actora afirmó que esa información no la envió ella, entonces le correspondía demostrar cuál información sí proporcionó.

Lo anterior, atiende a la razonabilidad de las cargas probatorias que se explicó en la ejecutoria emitida por contradicción de tesis 189/2007-SS, la cual originó la jurisprudencia 2ª.J./202/2007 (explicada con anterioridad), en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las copias certificadas de los estados de cuenta individuales expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con datos obtenidos del Sistema Nacional de Derechos y Obligaciones (S.IN.D.O), son aptas y suficientes para desvirtuar la negativa de la relación laboral manifestada por la parte patronal en un juicio de nulidad, revirtiendo la carga de la prueba a la parte actora, para que ella compruebe su afirmación en el sentido de que las personas mencionadas no son sus trabajadores, porque esta carga probatoria se sustenta en la presunción que resulta de las copias certificadas de los estados de cuenta individuales, que tiene como base directa los datos proporcionados por el patrón; por tanto, pesa en su contra esa presuntiva de que son datos e información proporcionados por ella y entonces prueban en su contra, salvo que las desvirtúe; lo que en la especie no acontece.

A mayor abundamiento, cabe destacar que de la certificación de la consulta de cuentas individuales, , se advierte que la autoridad señaló que los documentos impresos concordaban fiel y exactamente con la información que tuvo a la vista y que reprodujo en relación con el patrón [redacted], con registro patronal [redacted]

[redacted] la cual obtuvo del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social; de donde se colige, que tal certificación cumple con los lineamientos indicados por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al fallar la contradicción de tesis 189/2007-SS.

Aunado a lo anterior, cabe agregar que de las impresiones certificadas de dichas consultas individuales, se advierten datos que permiten constatar la forma en la cual fueron generadas, comunicadas o, en su caso, archivadas para corroborar su fiabilidad, con el fin de esclarecer el vínculo laboral entre los trabajadores indicados en dichas cuentas individuales y la parte actora (patrón).

En efecto, de las cuentas individuales que fueron remitidas por la autoridad demandada, destacan los datos consistentes en: Registro Patronal [redacted]el nombre de los asegurados, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el número de seguridad social de aquéllos, la fecha de recepción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el monto del salario base de cotización de tales trabajadores; datos que coinciden plenamente con los asentados en la cédula de liquidación combatida; de ahí la fiabilidad de dichos documentos.

Resulta aplicable por analogía, la Jurisprudencia PC.II. J/7 L (10a.), emitida por el Pleno del Segundo Circuito; cuyo rubro y texto es el siguiente:

> **"CONSULTAS DE CUENTAS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. LA CERTIFICACIÓN QUE DE ÉSTAS REALICE EL SUBDELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ADQUIERE VALOR PROBATORIO PLENO PARA DEMOSTRAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE LA PERSONA FÍSICA O MORAL Y SUS TRABAJADORES.** Las certificaciones de consultas de cuentas individuales realizadas por el Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que contengan información suficiente de la base de datos del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (Sindo) del citado Instituto, como el número de registro patronal -correspondiente al patrón contribuyente-, el nombre del o los trabajadores por lo que se liquida, la Clave Única de Registro de Población (CURP) de éstos, el número de seguridad social respectivo, la fecha de recepción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el monto del salario, adquieren valor probatorio pleno para demostrar la veracidad de los movimientos que allí se detallan y, por tanto, resultan aptas para acreditar la relación laboral entre la persona física o moral y sus trabajadores, así como que fue el patrón quien, en su momento, remitió la información a dicho Instituto, al tratarse de certificaciones realizadas por éste en uso de sus facultades, con la finalidad de probar el contenido de la información almacenada en sus archivos, sin que para ello se requiera la elaboración de una certificación específica, de una interpretación o decodificación que las haga comprensibles, ni de algún otro documento que explique su contenido, pues de los documentos certificados puede conocerse la información necesaria para tener por acreditada la relación laboral; por lo que si el patrón estima que aquellos documentos no se ajustan a la realidad, debe demostrarlo mediante el ofrecimiento de los medios probatorios correspondientes."

De tal manera que, la simple afirmación de la accionante en el sentido de que no utilizó el número patronal de identificación electrónica para realizar los referidos movimientos, no trae como consecuencia que las cuentas individuales carezcan de valor probatorio, sino que esa afirmación debe probarla con los medios de convicción idóneos para tal efecto; puesto que con los documentos exhibidos por la autoridad demandada, además de acreditarse la relación laboral entre la enjuiciante y los trabajadores de trato, también se demuestra que aquella utilizó el número patronal de

identificación electrónica para realizar los referidos movimientos, así como que cuenta con número patronal de identificación electrónica o con firma electrónica avanzada.

Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias XVI.1o.A. J/10 y XVI.1o.A. J/7, emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito; que son del tenor literal siguiente:

> **"ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LA AUTORIDAD APORTA COPIAS CERTIFICADAS DE ÉSTOS ANTE LA NEGATIVA LISA Y LLANA DEL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE CONTAR CON NÚMERO PATRONAL DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA O HABER REALIZADO MOVIMIENTO AFILIATORIO ALGUNO, CORRESPONDE A ÉSTE DESVIRTUAR DICHOS DOCUMENTOS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 202/2007).** De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 202/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 242, de rubro: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN.", los certificados de dichos estados de cuenta, independientemente de ser resultado de información presentada vía formato impreso o a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica, que hace las veces de firma autógrafa), tienen valor probatorio pleno para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón, aun cuando éste la desconozca, por lo que es innecesario exigir su perfeccionamiento. Por tanto, es insuficiente que el actor, en el juicio contencioso administrativo, se limite a negar lisa y llanamente que cuenta con un número patronal de identificación electrónica o que haya realizado movimiento afiliatorio alguno, dado que la información utilizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para emitir las cédulas de liquidación fiscal, se obtiene de formatos impresos autorizados con firmas autógrafas o de medios electrónicos

presentados por el patrón, en los que utiliza dicho número, máxime si ese organismo aporta copias certificadas de los estados de cuenta individuales de los trabajadores, con datos obtenidos del Sistema Nacional de Derechos y Obligaciones (SINDO), pues en ese caso la negativa de la relación laboral y de la afiliación, implícitamente conlleva la afirmación de que los documentos aportados a juicio son falsos e inexactos, y eso hace necesario que el actor los desvirtúe, pues de lo contrario debe reconocerse la validez de la resolución administrativa impugnada."

"ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DESVIRTÚAN, POR SÍ SOLOS, LA NEGATIVA LISA Y LLANA FORMULADA POR EL PATRÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE HABER REALIZADO TRÁMITES PARA OBTENER UNA FIRMA ELECTRÓNICA Y, CONSECUENTEMENTE, CORRESPONDE A ÉSTE DESACREDITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN AQUÉLLOS. Los estados de cuenta individuales emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de la información que consta en otros documentos, entre ellos, aquellos en los que aparece firma autógrafa o electrónica del patrón en la presentación de inscripciones, avisos o informes, tienen pleno valor probatorio, porque: a) esa información se obtiene de instrumentos suscritos por el patrón o del documento en que se consigna el número patronal de identificación electrónica, que hace las veces de firma autógrafa, y eso implica que su origen es cierto y válido; b) los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, otorgan facultades a dicho organismo para conservar en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza y certificar la información que el patrón le proporciona a través de documentos físicos en los que conste su firma o en medios electrónicos, en los que haga uso de su número de identificación electrónica; y, c) en atención a los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 46, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la veracidad de los datos que contenga el estado de cuenta, al derivar de un acto de autoridad administrativa, es legal, salvo prueba en contrario. Así, los estados de cuenta no requieren ser una copia certificada del formato autorizado con firma autógrafa o de la impresión del medio en que el patrón presentó la información, ni es preciso que en ellos conste el número patronal de identificación electrónica, dado que tal información es conservada por el instituto mencionado. En ese contexto, los estados de cuenta individuales de los trabajadores que, como prueba, ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social en un juicio contencioso administrativo, por sí solos, desvirtúan la negativa lisa y llana formulada por el patrón, de haber realizado trámites para obtener una firma electrónica y, por tal razón, no pudo haber presentado información por medios magnéticos o informáticos utilizando su número patronal de identificación electrónica. Consecuentemente, corresponde al patrón desacreditar los datos asentados en aquéllos."

De tal suerte que, al quedar plenamente acreditada la relación laboral entre la accionante y los trabajadores detallados en las resoluciones sujetas a debate, se concluye que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 42 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la actora debió demostrar su afirmación en el sentido de que los nombres de las personas que aparecen en las cédulas de liquidación cuestionadas o los datos contenidos en dichos estados de cuenta, no corresponden a la información que ella envió al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con los movimientos afiliatorios de sus trabajadores; ya sea porque esos datos fueron aclarados, rectificados o refutados mediante el procedimiento previsto en la ley (artículos 6º y 50 del Reglamento de la materia) o porque no corresponden a los que proporcionó el patrón, lo cual podría haber demostrado a través de distintas probanzas, verbigracia, las nóminas, listas de asistencia, recibos de pago, contratos, los avisos que sí ha dado, incluso a través del método del envío de los datos, por falsificación de la firma electrónica o número de identificación patronal, etcétera; sin que haya acreditado tal extremo, por lo que es claro que los agravios expresados por la actora resultan del todo infundados para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada.

Ulteriormente, es infundado lo sostenido por la parte actora en el sentido de que los actos impugnados se encuentran indebidamente fundados y motivados.

Los artículos 39 C y 251, fracción XV de la Ley del Seguro Social, que fueron invocados por la autoridad demandada en las cédulas de liquidación controvertidas, establecen lo siguiente:

LEY DEL SEGURO SOCIAL

"Artículo 39 C. En el caso en que el patrón o sujeto obligado no cubra oportunamente el importe de las cuotas obrero patronales o lo haga en forma incorrecta, el Instituto podrá determinarlas presuntivamente y fijarlas en cantidad líquida, **con base en los datos con que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales**. Esta determinación deberá considerar tanto los saldos a favor del Instituto como los que pudiera haber a favor del patrón debido a errores en lo presentado por este último.

En la misma forma procederá el Instituto, en los casos en que al revisar las cédulas de determinación pagadas por los patrones, detecte errores u omisiones de los que se derive incumplimiento parcial en el pago de las cuotas.

Las cédulas de liquidación que formule el Instituto deberán ser pagadas por los patrones, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, en los términos del Código.
(...)."

"Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

[...]

XV. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta Ley, **aplicando en su caso, los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien, a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales;"**

(Énfasis añadido)

Conforme a los citados preceptos, cuando el patrón o sujeto obligado no cubra oportunamente el importe de las cuotas obrero

patronales o lo haga en forma incorrecta, o bien cuando al revisarse las cédulas de determinación pagadas por los patrones se detecten errores u omisiones, el Instituto podrá determinarlas presuntivamente y fijarlas en cantidad líquida, ejerciendo las siguientes facultades:

- Con base en los datos con que cuente;
- Conforme a los documentos proporcionados por otras autoridades fiscales; y
- Con base en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, como organismo fiscal autónomo.

Ahora bien, como se advirtió con antelación, la autoridad demandada, con fundamento en los artículos 39 C y 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, emitió las cédulas de liquidación determinantes de los créditos fiscales impugnados, en virtud de que la parte actora incumplió con el pago de cuotas obrero–patronales por los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, en relación con los trabajadores que se detallan en las cédulas de liquidación en estudio; de lo cual tuvo conocimiento, con base en los datos y movimientos afiliatorios que el patrón, hoy sociedad actora, informó al Instituto demandado, en cumplimiento a su obligación de comunicar sus altas, reingresos, bajas y modificaciones salariales, dentro de los plazos establecidos por la Ley del Seguro Social.

En este sentido, si la enjuiciada para emitir las referidas cédulas de liquidación, *se basó en los datos que le fueron proporcionados por la hoy actora en su carácter de patrón*, resulta incuestionable que la autoridad demandada inició sus facultades de comprobación, con base en dicha información en términos del artículo 39 C y 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social; sin que fuese necesario que le requiriera a la accionante los datos necesarios para determinar las cuotas obrero-patronales omitidas, o aquellas que hubiese enterado de forma incorrecta, o bien haber efectuado la práctica de alguna visita domiciliaria para lograr tal fin, dado que no ejerció sus facultades de comprobación que se encuentran previstas en las fracciones XVIII y XXVIII, del artículo 251, de la Ley del Seguro Social, sino la diversa conferida en la fracción XV del numeral en comento.

A lo anterior sirven de apoyo, la siguiente tesis aislada que a continuación se transcriben:

> [TA];
> 9a. Época;
> T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;
> XXIV, Agosto de 2006;
> Pág. 2339
>
> **"SEGURO SOCIAL. LOS ARTÍCULOS 251, FRACCIÓN XV, DE LA LEY RELATIVA Y 22 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS VIGENTE HASTA EL 1O. DE NOVIEMBRE DE 2002, AL NO PREVER QUE DEBA NOTIFICARSE AL GOBERNADO EL INICIO DE LA FACULTAD A QUE SE REFIEREN, NI LA TEMPORALIDAD EN QUE ÉSTA DEBE LLEVARSE A CABO, NO INFRINGEN LAS GARANTÍAS DE INVIOLABILIDAD DOMICILIARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA TUTELADAS POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** Del análisis conjunto de los numerales 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social y 22 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social vigente

hasta el 1o. de noviembre de 2002, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social procederá a determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de ley, cuando dichos patrones no determinen el importe de las cuotas obrero-patronales dentro del plazo señalado en la ley, sus reglamentos, el decreto o convenio de incorporación respectivo, o lo hagan en forma incorrecta, para lo cual dicho instituto determinará en cantidad líquida las cuotas omitidas y formulará la cédula de liquidación correspondiente, aplicando, en su caso: a) Los datos con que cuente; b) Los documentos proporcionados por otras autoridades fiscales; c) La información contenida en los dictámenes formulados por contador público autorizado; o, d) Con base en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que tiene como organismo fiscal autónomo; es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para determinar los créditos fiscales en contra de los patrones, con base en lo dispuesto por los mencionados artículos, no requerirá a la parte patronal para que le proporcione los datos necesarios para determinar las cuotas obrero-patronales omitidas o aquellas que hubiese enterado de forma incorrecta, menos aún tendrá que practicarle visita domiciliaria para lograr tal fin y, por tanto, no es requisito indispensable que se notifique al gobernado el inicio de facultades de fiscalización que no tienen la naturaleza de visitas domiciliarias o de revisiones de gabinete o escritorio, tan es así, que el referido artículo 251, en sus fracciones XVIII y XXVIII regula su práctica; por ende, no puede concluirse que la referida fracción XV del aludido artículo 251 y el diverso 22 del reglamento citado, al no prever que deba notificarse al gobernado el inicio de la facultad señalada en tales preceptos legales, ni la temporalidad en que ésta debe llevarse a cabo, infrinjan las garantías individuales de inviolabilidad domiciliaria y seguridad jurídica que tutela el artículo 16 constitucional."

[TA];
9a. Época;
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;
XVIII, Julio de 2003;
Pág. 1133

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN LAS EJERCE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO CONFORME ALGUNA DE LAS MODALIDADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El precepto de mérito establece como

> facultades y atribuciones de dicho organismo, entre otras, determinar los créditos a su favor y las bases para la liquidación de cuotas y recargos, así como sus accesorios y fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, además de determinar la existencia, contenido y alcances de las obligaciones incumplidas por los patrones, aplicando los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, de manera que puede ordenar y practicar visitas domiciliarias y requerir la exhibición de libros y documentos, con la finalidad de constatar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables. Por tanto, es equívoca la consideración de la autoridad resolutora, en el sentido de que el instituto debe ejercer tales facultades de comprobación observando alguna de las modalidades contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que si bien es cierto que en los artículos 15, 16, 40, 277, 289, 291, 298 y 305 de la Ley del Seguro Social, se hace remisión al código tributario, también resulta verdad que ninguno de esos preceptos alude a las facultades de comprobación que competen a aquél, mismas que están expresamente previstas y reguladas en el mencionado artículo 251 de la ley especial en consulta."

SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en atención a los principios procesales de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, que rigen las sentencias, se procede al análisis del concepto de impugnación en el cual señala que en las cédulas combatidas se incluyó el **concepto de gastos médicos a pensionados** previsto en el artículo 25 de la Ley del seguro Social, el cual resulta excesivo, aunado a que se omitió citar el artículo 281, fracción II, de dicho ordenamiento, que regula la reserva operativa correspondiente a ese concepto.

La autoridad demandada, al formular su **contestación a la demanda**, sostuvo la legalidad de la resolución impugnada.

Es **infundado** el concepto de impugnación en estudio, en atención a las siguientes consideraciones.

Se estima necesario conocer puntualmente lo establecido en los artículos 23 y 25, de la Ley del Seguro Social, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

> **"Artículo 23.** Cuando los contratos colectivos concedan prestaciones inferiores a las otorgadas por esta ley, el patrón pagara al instituto todos los aportes proporcionales a las prestaciones contractuales. Para satisfacer las diferencias entre estas últimas y las establecidas por la ley, las partes cubrirán las cuotas correspondientes.
>
> Si en los contratos colectivos se pactan prestaciones iguales a las establecidas por esta ley, el patrón pagara al instituto íntegramente las cuotas obrero patronales.
>
> En los casos en que los contratos colectivos consignen prestaciones superiores a las que concede esta ley, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior hasta la igualdad de prestaciones, y respecto de las excedentes el patrón quedara obligado a cumplirlas. Tratándose de prestaciones económicas, el patrón podrá contratar con el instituto los seguros adicionales correspondientes, en los términos del título tercero capítulo II de esta ley.
>
> El instituto, mediante estudio técnico-jurídico de los contratos colectivos de trabajo, oyendo previamente a los interesados, hará la valuación actuarial de las prestaciones contractuales, comparándolas individualmente con las de la ley, para elaborar las tablas de distribución de cuotas que correspondan."

> **"Artículo 25.** En los casos previstos por el artículo 23, el estado aportara la contribución que le corresponda en términos de esta ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando este, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.

> **Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el estado aportaran una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento."**
>
> (Lo subrayado y resaltado es nuestro).

De los preceptos legales transcritos con antelación, se sigue que cuando los contratos colectivos concedan prestaciones inferiores a las otorgadas por la Ley del Seguro Social, el patrón pagará al Instituto Mexicano del Seguro Social todos los aportes proporcionales a las prestaciones contractuales, y a fin de satisfacer las diferencias entre estas últimas y las establecidas por dicha ley, las partes cubrirán las cuotas correspondientes.

Que en caso de que en los contratos colectivos se pacten prestaciones iguales a las establecidas por la referida ley, el patrón pagara al instituto íntegramente las cuotas obrero patronales; en caso de que en ellos se consignen prestaciones superiores el patrón pagará íntegramente las cuotas obrero patronales hasta la igualdad de prestaciones, respecto de las excedentes el patrón quedara obligado a cumplirlas, y tratándose de prestaciones económicas, el patrón podrá contratar con el instituto los seguros adicionales correspondientes.

Asimismo, el instituto, mediante estudio técnico-jurídico de los contratos colectivos de trabajo, oyendo previamente a los interesados, hará la valuación actuarial de las prestaciones

contractuales, comparándolas individualmente con las de la ley, para elaborar las tablas de distribución de cuotas que correspondan.

También se prevé que en los casos referidos respecto a los contratos colectivos previstos por el artículo 23, el estado aportara la contribución que le corresponda en términos de la ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando este, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.

Por último, se establece que para cubrir **las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios,** en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el estado aportaran una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

Ahora bien, en el caso concreto, la parte actora sostiene que la autoridad demandada al emitir las resoluciones controvertidas, dejó de considerar que el rubro de GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS, no es uno de los seguros contemplados en el régimen obligatorio de manera independiente, por lo que su pago se traduce en

una doble tributación a su cargo, ya que al estar sujeta al régimen obligatorio de los seguros contemplados en el artículo 11, de la Ley del Seguro Social, y realizar el pago de las cuotas determinadas en todas y cada una de las ramas de aseguramiento en materia de seguridad social, no se encuentra obligada al pago en el rubro de GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS, **el cual es infundado.**

En la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social, presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el **nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco**, se estableció lo siguiente:

> "Es de señalarse que desde 1944, a través de distintas modificaciones a la ley, los beneficios del ramo se han aumentado sustancialmente tales como: pensiones a familiares ascendientes, reducción de las semanas necesarias para tener derecho a los beneficios, gastos médicos a pensionados y sus derechohabientes, ayuda asistencial, extensión de la edad límite para la pensión de orfandad, asignaciones familiares, incremento de los montos de las pensiones, indización de las mismas al salario mínimo, un mes de aguinaldo e incrementos de las cuantías mínimas, las cuales se encontraban en 1989 en cerca del 35% de un salario mínimo del Distrito Federal, pasando, a partir del 1o. de enero de 1995, al 100% del mismo.
>
> En cambio, las cuotas de este seguro sólo se han incrementado en dos ocasiones: en 1991, cuando se aumentaron del 6% al 7% sobre los salarios cotizables, además de un aumento anual de 0.2% hasta llegar al 8% en 1996 y el 0.5% que se agregó en las reformas a la ley en 1993. No obstante, esto ha resultado insuficiente para cubrir las prestaciones que otorga este ramo.
>
> Más aún, debe recordarse que, por mandato legal, los remanentes de este ramo de seguro se invirtieron en la construcción de una amplia red de Infraestructura para la atención médica y las prestaciones sociales en beneficio de los derechohabientes y la población en general.
>
> Durante la trayectoria institucional de cinco décadas, se han efectuado transferencias de recursos entre los distintos ramos de aseguramiento, muy especialmente de los ramos de la IVCM

(invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte) y guarderías para apoyar al de enfermedades y maternidad, el cual ha operado prácticamente desde su inicio con déficit financiero.

La IVCM, por tanto, no cuenta con las reservas líquidas necesarias, además de que el ramo de enfermedades y maternidad fue omiso en retribuir la renta correspondiente por las inversiones hechas en su favor.

Todo lo anteriormente descrito ha colocado al IMSS en una difícil situación financiera, que de no tomar las medidas necesarias con oportunidad, lo llevaría a poner en entredicho el cumplimiento de las obligaciones del ramo de la IVCM en perjuicio de millones de mexicanos. El costo fiscal de la iniciativa que se propone, como se verá más adelante, es menor que el costo que se tendría que cubrir de no realizar modificaciones
(...)

Se propone que el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte sea dividida en dos seguros, de conformidad con la naturaleza propia de los riesgos o situaciones a cubrir. Esto implica también, modificar la forma de otorgar prestaciones a fin de hacerlas congruentes entre los dos seguros, así como con las del seguro de riesgos de trabajo al que nos referiremos posteriormente. Los dos seguros que se crean son: la invalidez y Vida (IV) y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV). Asimismo se establece una reserva específica para financiar los gastos médicos de todos los pensionados.
(...)

La prima propuesta para este seguro (invalidez y vida) es del 2.5% del salario base de cotización, la cual se cubrirá de manera, tripartita. Para efecto de darle transparencia a la administración financiera del instituto se crea una reserva especial destinada al financiamiento de los gastos médicos de todos los pensionados, que es una de las prestaciones más significativas desde el punto de vista económico y social que reciben los trabajadores retirados y que representa uno de los rubros de mayor erogación en la institución. La prima de dicha reserva, también de naturaleza tripartita, será de 1.5% del salario base de cotización.
(...)

Es necesario recapitular que la cuota del 8.5% de los salarios cotizables que actualmente se aportan a la IVCM,, de manera tripartita, se dividirá en tres: 2.5% para el seguro de invalidez y vida; 4.5% para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y 1.5%

> para la reserva especial de castos médicos a pensionados, distribuyéndose en el mismo porcentaje de contribuciones tripartitos que actualmente se considera. Por su parte el 2% patronal de la subcuenta de retiro del SAR se incorporará al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es decir, esta propuesta no implica modificación alguna en las contribuciones de obreros y patrones sino una mejor asignación de acuerdo a la naturaleza de las prestaciones."

Por otra parte, en la discusión que tuvo lugar el **doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco** en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dos de sus integrantes afirmaron lo siguiente:

> "En el capítulo del seguro de enfermedades y maternidad se establece quiénes quedan amparados por este seguro, así como lo relacionado a las prestaciones en dinero y en especie a la manera en que se financiarán dichas prestaciones. También se contempla la incorporación de trabajadores independientes, con la nueva ley se crea un sistema de pensiones más equitativo, se establecen dos nuevos seguros, primero el de invalidez y de vida, sustituyendo al anterior; así como los gastos médicos de pensionados.
>
> (...)
>
> Con este nuevo esquema de ahorro, se otorgará a los trabajadores una mejor pensión, hay que señalar también el establecimiento de una reserva específica para financiar los gastos médicos, que garantizará la prestación oportuna y eficiente de servicios médicos a los pensionados".

Del proceso legislativo reseñado destaca que el legislador puso en evidencia el grado de deterioro de las finanzas públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocasionado, en una parte, por el **otorgamiento de las prestaciones relacionadas con el seguro de enfermedades y maternidad** sin contar con una retribución adecuada por la falta de aumento en el entero de las cuotas obrero patronales.

Por tal motivo, hizo ver la necesidad de emprender acciones para que tal situación no se agravara.

Entre esas tareas, se impulsó dividir el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) en dos segmentos: a) invalidez y vida (IV), y b) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), hecho que implicaba modificar la forma de otorgar prestaciones a esos seguros y establecer una reserva específica para financiar los gastos médicos de todos los pensionados, por ser uno de los rubros de mayor erogación en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con ese propósito, se dijo que la cuota del ocho punto cinco por ciento (8.5%) de los salarios cotizables que se aportaban al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) se dividiría en tres: dos punto cinco por ciento (2.5%) para el seguro de invalidez y vida; cuatro punto cinco por ciento (4.5%) para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, **y uno punto cinco por ciento (1.5%) para la reserva especial de gastos médicos a pensionados.**

Al aprobarse la Ley del Seguro Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de **veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,** se concretó la división del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), y se estableció una reserva especial destinada al financiamiento de los gastos médicos de los pensionados.

La reserva operativa correspondiente quedó incorporada en el artículo 281, fracción II, de la Ley del Seguro Social, que indica:

> **"Artículo 281.** Se establecerá una reserva operativa para cada uno de los siguientes seguros y coberturas:
>
> I. Enfermedades y Maternidad;
>
> **II. Gastos Médicos para Pensionados;**
>
> III. Invalidez y Vida;
>
> IV. Riesgos de Trabajo;
>
> V. Guarderías y Prestaciones Sociales;
>
> VI. Seguro de Salud para la Familia, y
>
> VII. Para otros seguros o coberturas, que en su caso, se establezcan con base en esta Ley.
>
> Las reservas operativas recibirán la totalidad de los ingresos por cuotas obrero patronales y aportaciones federales, así como por las cuotas y contribuciones de los seguros voluntarios y otros que se establezcan, salvo lo dispuesto en la fracción VI del artículo 15 de esta ley. Sólo se podrá disponer de ellas para hacer frente al pago de prestaciones, gastos administrativos y constitución de las reservas financieras y actuariales del seguro y cobertura a que correspondan, y para la aportación correspondiente para la constitución de las reservas de operación para contingencias y financiamiento y general financiera y actuarial.".

Es de destacar que en el proceso legislativo reseñado no se menciona en absoluto que la obligación de enterar la cuota del uno punto cinco por ciento (1.5%) para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, establecida en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, se genera siempre y cuando las relaciones de trabajo entre los obreros y los patrones se rija por un contrato colectivo en

términos de lo que dispone el diverso 23 de esa legislación, sino que ese deber es independiente de la existencia de esa clase de convenios.

En efecto, el establecimiento de dicha cuota comprende a todos los sujetos que integran el régimen obligatorio de seguridad social, ya que tiene por objeto financiar el otorgamiento de prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de una clase de sujetos en particular, esto es, de los pensionados y sus beneficiarios tomando como base el salario base de cotización de los trabajadores en activo.

Por tanto, de la lectura integral de los preceptos transcritos anteriormente, analizados conjuntamente con el proceso legislativo descrito, se concluye que la cuota relativa a los gastos médicos de los pensionados y sus beneficiarios debe enterarse con independencia de que las relaciones laborales se gobiernen o no bajo un contrato colectivo de trabajo.

Es así, porque la interpretación realizada respecto del artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social brinda a dicha norma un sentido completamente distinto de aquel que deriva si sólo se toma en cuenta su ubicación en el contexto normativo al que pertenece.

Sin embargo, la inadecuada posición o la poco afortunada redacción de ese precepto no puede llevar a una conclusión que esté por encima de la verdadera intención del legislador al establecer la obligación de pago de una cuota de uno punto cinco por ciento (1.5%),

para financiar las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, y crear con ese propósito una reserva operativa.

Tan no se relaciona el segundo párrafo del artículo 25 con el diverso 23 de la Ley del Seguro Social, que el legislador dispuso en el precepto 196, primer párrafo, de ese ordenamiento, que si el asegurado que goza de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez reingresa al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el párrafo segundo del citado artículo 25.

El citado artículo 196 establece:

> **"Artículo 196.** El asegurado que goce de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez, cuando reingrese al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley, ni las de los seguros de invalidez y vida.".

Disposición que confirma que las cotizaciones por los gastos médicos de los pensionados y sus beneficiarios no se vinculan con la existencia de un contrato colectivo de trabajo, **sino que la obligación de su pago se genera por el simple hecho de que un trabajador se encuentre inscrito en el régimen obligatorio.**

Cabe señalar que no se opone a la conclusión alcanzada el hecho de que los artículos 11, fracción II, 84, 91, 93, 105 y 106 de la Ley del Seguro Social establezcan que en el régimen obligatorio del seguro de enfermedades y maternidad se encuentran amparados los pensionados, quienes tienen derecho a recibir prestaciones en especie tales como asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y

que las cuotas para cubrirlas se distribuyen de forma tripartita en los porcentajes que en el último de esos artículos se establece.

Se afirma lo anterior, porque tales preceptos deben concatenarse con el diverso 25, segundo párrafo, de dicho ordenamiento, al contener la regla especial que debe considerarse para financiar las prestaciones en especie del seguro de enfermedades de los pensionados y sus beneficiarios.

Consideración que se corrobora si se toma en cuenta que la previsión legal de una reserva operativa para el rubro de gastos médicos a los pensionados y a sus beneficiarios tuvo como propósito establecer un régimen de financiamiento distinto o adicional respecto del régimen obligatorio para sufragar los gastos de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad.

Por ello, si bien es cierto que el concepto "GASTOS MÉDICOS A PENSIONADOS" **no constituye un seguro del régimen obligatorio, también lo es que implica un gravamen para garantizar las coberturas en especie de los pensionados y sus beneficiarios correspondientes al seguro mencionado.**

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se reproduce nuevamente el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social para entender en sus justos términos su significado.

> **"Artículo 25.** En los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución que le corresponda en términos de esta Ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.
>
> Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.".

La norma reproducida debe considerarse en el sentido de que:

- La obligación establecida en el segundo párrafo, esto es, el deber de enterar de manera tripartita una aportación de uno punto cinco por ciento (1,5%) sobre el salario base de cotización para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, se actualiza sin que para ello sea relevante la existencia de una relación de trabajo que se rija por un contrato colectivo en términos de lo que dispone el artículo 23 de la citada legislación, ya que, por el contrario, tiene aplicación de manera general.

- La cuota de uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el salario base de cotización se entera como parte integrante la norma utiliza la preposición "en" de los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Tal como así fue propuesto en la exposición de motivos de la ley en análisis, en la que, como se recordará, se estableció que: *"... la cuota del 8.5% de los salarios cotizables que actualmente se aportan*

a la IVCM (rama del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte), de manera tripartita, se dividirá en tres: 2.5% para el seguro de invalidez y vida; 4.5% para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 1.5% para la reserva especial de gastos médicos a pensionados, distribuyéndose en el mismo porcentaje de contribuciones tripartitas que actualmente se considera".

Las razones que anteceden conducen a declarar **infundados** los agravios que se analizan, toda vez que la parte actora lleva a cabo una interpretación inexacta de los artículos 23 y 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, **en la medida en que la cuota establecida en ese último precepto debe pagarse con independencia de que la parte patronal tenga celebrado o no un contrato colectivo con sus trabajadores.**

Asimismo, porque el **entero de esa contribución no puede entenderse como una doble tributación en relación con las cuotas previstas en el seguro del régimen obligatorio de enfermedades y maternidad, pues los gastos médicos a pensionados, establecidos en el citado artículo 25, segundo párrafo, tienen autonomía y son complementarios a aquéllas.**

Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J.63/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente:

"Época: Décima Época
Registro: 2009254

Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a./J. 63/2015 (10a.)
Página: 1653

SEGURO SOCIAL. LA CUOTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EXISTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. El artículo y párrafo citados establecen que los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de 1.5% sobre el salario base de cotización, para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora bien, de la interpretación de dicha porción normativa se obtiene que tal cuota es de aplicación general a todos los sujetos del régimen obligatorio, y a pesar de que el primer párrafo del artículo 25 indicado contenga una disposición dirigida a especificar la forma de calcular las aportaciones en los supuestos en que se hayan pactado en los contratos colectivos prestaciones de seguridad social, ello no limita ni condiciona a este último supuesto la aplicación de la cuota del segundo párrafo, lo que se ajusta no sólo a la letra de dicho precepto, sino también a la finalidad perseguida por el legislador, al sistema del plan de seguridad social regulado en la Ley del Seguro Social y a su sostenibilidad.

Consecuentemente, **es legal que la autoridad demandada,** haya determinado a la parte actora cuotas por el concepto de "GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS", en base a lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, **con independencia de que la demandante cumpla sus obligaciones patronales bajo el régimen obligatorio y no tenga un contrato colectivo de trabajo con sus empleados.**

En ese sentido, en la resolución controvertida se hizo notar que tanto los patrones como los trabajadores y el Estado debían aportar una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización.

Así, la autoridad demandada para explicar la operación aritmética para la determinación de las cuotas obrero patronales elaboró un cuadro, en el que para el seguro de gastos médicos reveló que la cuota patronal se calculaba con el SBC –*salario base de cotización*- por 1.05% por – días cotizados; y que la cuota obrera se computaba con el SBC –*salario base de cotización*- por 0.375% por – días cotizados.

En base a todo lo anterior, es de concluirse que la autoridad demandada en la resolución controvertida sí fundó y motivó el pago del rubro "Gastos Médicos Pensionados", respecto de lo créditos fiscales impugnados.

En virtud de lo anterior el hecho de que en la resolución determinante de los créditos fiscales impugnados, no se cite el artículo 281, fracción II, de la Ley del Seguro Social, resulta intrascendente, toda vez que el artículo 25, segundo párrafo, del referido ordenamiento legal, es donde se establece el cobro de cuotas respecto del rubro "gastos médicos para pensionados", mismo que sí fue señalado en el acto impugnado, lo cual resulta suficiente para tener por debidamente fundado y motivado el mismo.

OCTAVO. Con fundamento en el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en atención a los principios procesales de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, que rigen las sentencias, se procede al análisis de los conceptos de impugnación del escrito de demanda, en los que señala que la autoridad al imponer la multa no consideró los elementos necesarios para su individualización.

Al contestar la demanda la autoridad sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada.

A juicio de quien suscribe los agravios en estudio resultan **infundados**, toda vez que la demandada impuso la multa **mínima** prevista en el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, esto es, el equivalente al 40% de los conceptos omitidos, razón por la cual es incuestionable que las multas impuestas por la autoridad demandada no transgreden, ni vulneran la esfera jurídica de la hoy actora, puesto que las mismas se impusieron en una cantidad mínima, sin que además fuese necesario que la autoridad sancionadora razonara su arbitrio para fijar el monto de las sanciones, las circunstancias al caso en concreto, ya que independientemente de cuales fueron esas circunstancias, las mismas no tendrían relevancia jurídica en cuanto la autoridad demandada impuso como sanción una multa mínima legalmente establecida.

Resulta aplicable por analogía la Jurisprudencia 2a./J.127/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, página 219, cuyo texto señala:

> **"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.-** Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley

> aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima."

Así también, es aplicable al caso el criterio Jurisprudencial sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, junio 1996, Página 875, cuyo tenor dice:

> **"MULTA MÍNIMA.- LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA LAS GARANTÍAS.-** Cuando la autoridad sancionadora haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer la multa mínima contemplada en la Ley Tributaria aplicable, ello determina que el incumplimiento de los elementos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo son: la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de este, etcétera, resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, toda vez que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone multa mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una menor de esta".

Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se reconoce la **validez** de la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado, en términos de lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;

II. Se reconoce la **validez** de las resoluciones impugnadas, precisadas en el resultando primero de este fallo;

III. NOTIFÍQUESE a las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 65, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor en el presente juicio, ante el Secretario de Acuerdos, quien da fe.

Magistrado por Ministerio de Ley
Jorge Luis Rivera Medel

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de conformidad con lo establecido por el acuerdo **G/JGA/7/2023 de 16 de febrero de 2023**, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Eduardo Velasco Calderón
Secretario de Acuerdos

"El 1 de junio de 2026, el licenciado JORGE LUIS RIVERA MEDEL, Secretario de acuerdos con adscripción en la Séptima Sala Regional en la Ciudad de México de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 120, 115, párrafos, primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, por tratarse de nombres de personas físicas, lugares de nacimiento, grupo étnico, estado civil, domicilio, ocupación o profesión, datos de identificación de vehículos particulares, ubicación de inmuebles, descripción de personas físicas, etc. Conste."